

8.º La Dirección General de Política Arancelaria podrá dictar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de mayo de 1964.—P. D., José Luis Villar Palasi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

ORDEN de 29 de mayo de 1964 por la que se concede a «Etino Química, S. A.» el régimen de reposición con franquicia arancelaria de estireno monómero, por exportaciones de poliestirenos previamente realizadas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por «Etino Química, S. A.», en solicitud de régimen de reposición con franquicia arancelaria a la importación de estireno monómero, por exportaciones de poliestireno previamente realizadas,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto por su Dirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.º Se concede a «Etino Química, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle Industria, 35, la importación de estireno monómero (P. A. 29.01.B6), como reposición de poliestireno previamente exportado.

2.º A efectos contables, se establece que por cada 100 kilogramos de poliestireno exportado podrán importarse 102,04 kilos de estireno monómero, con franquicia arancelaria.

No existen subproductos aprovechables, por lo que no se devengarán derechos arancelarios a la importación.

3.º Se otorga esta concesión por un período de cinco años, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Las importaciones habrán de solicitarse dentro del año siguiente a la fecha de las exportaciones respectivas.

4.º La exportación precederá a la importación, debiendo hacerse constar en toda la documentación necesaria para el despacho que el interesado se acoge al régimen de reposición otorgado por la presente Orden ministerial.

5.º Las operaciones de importación y de exportación que se pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose a sus términos serán sometidas a la Dirección General de Comercio Exterior, a los efectos que a la misma competen.

6.º La Aduana, en el momento del despacho, requisará muestras de la mercancía que se exporte, así como de la primera materia a importar, para su análisis en el Laboratorio Central de Aduanas.

7.º Para obtener la licencia de importación con franquicia arancelaria justificará el beneficiario mediante la oportuna certificación de haberse exportado las mercancías correspondientes a la reposición pedida.

8.º La Dirección General de Política Arancelaria podrá dictar las normas que estime adecuadas para el desenvolvimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de mayo de 1964.—P. D., José Luis Villar Palasi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotizadas en la sesión celebrada el día 3 de junio de 1964:

DIVISAS	CAMBIOS	
	Comprador	Vendedor
	Pesetas	Pesetas
1 Dólar U. S. A.	59,783	59,963
1 Dólar canadiense	55,318	55,484
1 Franco francés nuevo	12,200	12,236
1 Libra esterlina	167,225	167,728
1 Franco suizo	13,854	13,895
100 Francos belgas	120,037	120,398
1 Marco alemán	15,045	15,090
100 Liras italianas	9,567	9,595
1 Florín holandés	16,536	16,585
1 Corona sueca	11,638	11,673
1 Corona danesa	8,658	8,684
1 Corona noruega	8,366	8,391
1 Marco finlandés	18,598	18,653
100 Chelines austriacos	231,546	232,222
100 Escudos portugueses	208,470	209,097

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

ORDEN de 21 de mayo de 1964 por la que se dispone se cumpla la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo entre «Unión Cinematográfica, S. A.», y la Administración General del Estado.

Ilmo. Sr.: En recurso contencioso-administrativo número 10.113-62 interpuesto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por «Unión Cinematográfica, S. A.», en concepto de demandante, y la Administración General del Estado como demandada, contra resolución de este Ministerio de 8 de agosto de 1962, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de la Dirección General de Cinematografía y Teatro de 11 de abril del mismo año, que declaró inválido el permiso de rodaje de la película «Viridiana», se ha dictado sentencia en 20 de marzo de 1964, cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que desestimando la alegación de inadmisibilidad formulada por el Abogado del Estado, en el recurso interpuesto por la representación procesal de «Unión Industrial y Cinematográfica, S. A.», contra Orden del Ministerio de Información y Turismo de 8 de agosto de 1962, y desestimando el mismo, en cuanto al fondo del pleito, debemos absolver y absolvemos a la Administración del Estado, declarando firme dicha Orden por estar ajustada a Derecho, sin haber lugar a imponer costas procesales a la entidad actora.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el fallo en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 103 y 105 a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1964.—P. D., Cabanillas Gallas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y Turismo.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 20 de mayo de 1964 por la que se ordena el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 23 de enero de 1964.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, número 9.201, interpuesto por doña Carmen Martínez Escribano y don Antonio, doña María, doña Remedios, doña Carmen, don Juan, don José, doña Sacramento, doña Angeles, doña Ascensión y doña Josefa Martínez Martínez, representados por el Procurador don Cristóbal Estévez Álvarez, bajo la dirección del Letrado don Federico Puig Peña, y la Administración General del Estado, demandada, y en su nombre el representante de la misma, contra Resolución del Ministerio de la Vivienda, denegatoria por silencio administrativo, al recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de la Dirección General de la Vivienda de 18 de noviembre de 1961, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, con fecha 23 de enero de 1964, ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de doña Carmen Martínez Escribano y sus diez hijos don Antonio Martínez Martínez, doña María Martínez Martínez, doña Remedios Martínez Martínez, doña Carmen Martínez Martínez, don Juan Martínez Martínez, don José Martínez Martínez, doña Sacramento Martínez Martínez, doña Angeles Martínez Martínez, doña Ascensión Martínez Martínez y doña Josefa Martínez Martínez, contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada formulado por aquéllos por la Resolución expresa de la Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda de dieciocho de noviembre de mil novecientos sesenta y uno; debemos declarar y declaramos que tales Resoluciones no son conformes a derecho, por lo que deberán considerarse nulas y sin efecto, sin hacer imposición de costas.

Así por nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José Arias.—Manuel Do-cayo.—Luis Bermúdez.—J. Samuel Roberes.—José Olives y Fel-lí.—Rubricados.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 20 de mayo de 1964.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 20 de mayo de 1964 por la que se ordena el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo con fecha 17 de febrero de 1964.

Ilmo Sr.: En los recursos contencioso-administrativos, acumulados, números 5.769 y 6.021, promovidos por doña Petra Guñales Montero, representada por el Procurador don Santos Gandarillas Calderón, defendida por el Letrado don Pedro Martín y por la «Sociedad Anónima Inmobiliaria Jubán», representada por el Procurador don José de Murga Rodríguez, defendida por el Letrado don Emilio Lamo de Espinosa, contra la Administración Central—Ministerio de la Vivienda—, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre justiprecio de finca expropiada sita en el barrio de Fuencarral, hoy Madrid, paraje de Valdelobos, lugar del Sacedal, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 17 de febrero del presente año, cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Petra Guñales Montero y el acumulado interpuesto por «Jubán, Sociedad Anónima», contra resolución del Ministerio de la Vivienda de quince de marzo de mil novecientos sesenta y uno, revocatorio del acuerdo del Gobernador civil de Madrid de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y ocho, en que se justipreció la finca propiedad de la recurrente doña Petra Guñales Montero, objeto de esta expropiación litigiosa, y en su lugar declaramos la parcial validez de dicha resolución administrativa del Ministerio de la Vivienda, por contraria a derecho y de conformidad con la valoración hecha por el Gobernador civil, declaramos que la cantidad a pagar por la entidad expropiante, como justo precio de la finca expropiada, es de doscientas veintitín mil quinientas pesetas, a razón de veinticinco pesetas por cada uno de los ocho mil ochocientos sesenta metros cuadrados de superficie, más el tres por ciento sobre la cantidad dicha en concepto de premio de afección y pago de intereses legales desde el día veintiocho de abril de mil novecientos cincuenta y cinco, fecha de efectiva ocupación de la finca, hasta que se efectúe el abono del precio total que en este fallo se fija, condenando a la Administración a pasar por esta declaración de derecho y absolviendo a las demás pretensiones formuladas por los demandantes, sin expresa condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ambrosio López.—José María Suárez.—Ginés Parra.—Rubricados.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 20 de mayo de 1964.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 20 de mayo de 1964 por la que se ordena el cumplimiento de la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo dictada con fecha 31 de enero de 1964.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Florentino, don Pedro y doña Julia Alvarez Varela y don Francisco, don Julián, doña Eugenia y doña Maura Alvarez Lozano Lozano, todos ellos como herederos de don Valentín Alvarez García, representados por el Procurador don José Tejedor Moyano, asistidos por Letrado, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada por don José de Murga Rodríguez, bajo la dirección de Letrado, contra Resolución del Ministerio de la Vivienda de 15 de marzo de 1961, sobre el justiprecio de finca expropiada a don Valentín Alvarez García por «Inmobiliaria Jubán, S. A.», para la construcción de viviendas en el barrio de Fuencarral, de esta capital, paraje denominado Valdelobos, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dictado, con fecha 31 de enero de 1964, sentencia cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que estimando la petición deducida por el Abogado del Estado representante de la Administración, desestima-

mos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José Tejedor Moyano en representación de don Florentino, don Pedro, doña Julia Alvarez Varela y don Francisco, don Julián, doña Eugenia y doña Evarista Alvarez Lozano, contra la Orden del Ministerio de la Vivienda de quince de marzo de mil novecientos cincuenta y uno, que valoró la finca situada en el paraje de Valdelobos, lugar de Santa Ana, de diecisiete mil novecientos veinte metros cuadrados, expropiada por «Inmobiliaria Jubán, Sociedad Anónima», de construcciones, a su causante don Valentín Alvarez García, al amparo de las disposiciones legales vigentes que así lo autorizaron, en la cantidad de ciento cincuenta y seis mil quinientas veinte pesetas cuarenta y cinco céntimos, incluido el tres por ciento como precio de afección, debemos declarar y declaramos que dicha disposición, en cuanto se refiere al expresado justiprecio, es conforme a Derecho y su importe deberá ser satisfecho por la entidad expropiante al nombrado dueño o a los que de él traigan causa, con el interés y la bonificación de la cuarta parte de su cuantía, prevenidos en el artículo quinto de la Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve, absolviendo a la Administración de la demanda, todo ello sin especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», y va extendida en cuatro folios de papel de oficio serie Z, números 1.186.380, 1.186.384, 1.186.385 y el presente 1.186.386, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ambrosio López.—Francisco Camprubi.—Manuel Cerviá.—Juan de los Ríos.—Francisco Vital (con las rúbricas).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 20 de mayo de 1964.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 20 de mayo de 1964 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo con fecha 9 de diciembre de 1963.

Ilmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo interpuesto como apelante por don Domingo López Alonso, representado por el Procurador don Elías Tejerina Reyero, dirigido por Letrado y como demandada la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra sentencia dictada por el Tribunal Provincial Contencioso-Administrativo de Oviedo, de 29 de marzo de 1962, resolviendo recurso contra acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación sobre justiprecio de parcelas expropiadas para la construcción de un grupo de viviendas bonificables en el denominado Barrio de la Luz, de Avilés; la Sala Quinta del Tribunal, con fecha 9 de diciembre de 1963, ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Fallamos: Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, fecha 29 de marzo de 1962, en cuanto desestimó los recursos acumulados interpuestos por don Domingo López Alonso, números 81, 82, 83 y 89 del año 1958, contra acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación, valorando las parcelas 102, 103, 104 y 110, respectivamente, del expediente general de expropiación para la construcción del Barrio de la Luz, de Avilés, y la revocamos respecto a desestimación del recurso acumulado número 88 de 1958 sobre la parcela 109 del mismo expediente, disponiendo en su lugar que por el Jurado Provincial de Oviedo, constituido en forma, se proceda a fijar el justiprecio de dicha finca continuándose después la tramitación con arreglo a Derecho de la pieza, dejando sin efecto lo actuado a partir del acuerdo anterior inclusive de 21 de julio de 1958 respecto a tal parcela; todo ello sin especial (continuación de los folios números 1.251.503 y 1.251.505) imposición de costas en ambas instancias. Así, por esta nuestra sentencia que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ambrosio López.—José María Suárez.—Evaristo Mouzo.—Justino Merino.—Ginés Parra.—Jiménez (con las rúbricas).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 20 de mayo de 1964.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.